

Crónica del mes

Octubre

La necesidad de una reforma orientada a sanear las finanzas públicas y costear el programa social pasó de ser consigna de unos cuantos a verdad incontestable luego que el Poder Ejecutivo, presionado por las circunstancias, asumiera como propio ese desafío. La discusión en torno a una reforma fiscal ha sido, sin lugar a dudas, el asunto de mayor trascendencia durante el mes de octubre. Tal discusión ha propiciado que la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran la propuesta minuciosamente elaborada por el Ejecutivo, pero sin la venia del FMLN, que demanda cambios más profundos. Según sus impulsores, las reformas permitirán al Estado recuperar unos 160 millones de dólares anuales de lo que deja de percibir por evasión y elusión fiscal. El empresariado nacional, sector clave en la discusión, aceptó a medias la propuesta de Casa Presidencial, aunque se mostró dispuesto a hacer algunos "sacrificios" a fin de llevar a buen término la propuesta. La sociedad en su conjunto, pues, ha terminado por aceptar la imperiosa necesidad de la reforma fiscal.

Entretanto, el clima de entendimiento generado alrededor de las mesas de diálogo instaladas a iniciativa del presidente Saca se ha resquebrajado ante los pocos resultados concretos de las mesas y la decisión del FMLN de retirarse de las mismas, bajo el pretexto de que servían únicamente para la publicidad de Casa Presidencial. Las pláticas entre las restantes fuerzas políticas continúan, pero sin la participación del principal partido de oposición, lo cual les resta el alcance prometido al inicio. En este punto también la sociedad salvadoreña empieza a matizar el entusiasmo inicial respecto del alcance de las mesas de diálogo: no han sido suficientes la sonrisa y las buenas intenciones que dibujaban los rostros de políticos y funcionarios al

inicio de la actual gestión presidencial; se requiere un cambio de actitud que todavía se echa de menos entre la clase política nacional.

Las diferencias partidarias fueron llevadas hasta la elección del nuevo secretario general de la OEA, ante la estrepitosa renuncia del primer centroamericano en ocupar esa investidura, el costarricense Miguel Ángel Rodríguez, por acusaciones de corrupción en su país. Su antiguo contendiente, el ex presidente salvadoreño Francisco Flores, ha encontrado en su propia tierra a férreos opositores a un nuevo sueño con hacerse de la secretaría. El FMLN y algunos sectores sociales han manifestado públicamente que Flores no es el candidato idóneo para ocupar la silla vacante. Pero no sólo eso. Han iniciado una campaña en el país y fuera del territorio nacional para alertar sobre la posibilidad de que el ex mandatario, un hombre que no mostró su mejor credencial democrática mientras gobernó su país, presida el máximo organismo político hemisférico. Como quiera que sea, Flores no parece gozar del respaldo internacional con el que contara Rodríguez, en gran parte por su cercanía a los intereses norteamericanos.

Así las cosas, el inicio del mes de octubre sorprendió al equipo económico de Antonio Saca entregado a proyectar el rumbo del país. El último día de septiembre, el ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, había entregado a la Asamblea Legislativa una de las herramientas necesarias para dinamizar la economía nacional: su proyecto del presupuesto general del Estado correspondiente al próximo año, el cual asciende a 2 992 millones de dólares. En dicho marco, el llamado plan antipobreza del Ejecutivo únicamente contaría con 1 millón de dólares de los recursos disponibles, cantidad a todas luces insuficiente. No obstante lo

anterior, el ministro justificó su planificación: "para impulsar un plan antipobreza, no es tanto la cantidad de recursos lo que soluciona el problema en ninguna parte del mundo. Lo que soluciona el problema es cómo se utilizan los recursos, qué tanta creatividad tiene cada quien para utilizarlos", dijo Suárez, sin entrar en mayores detalles. El 4 de octubre se reunió por vez primera la comisión legislativa encargada de discutir el proyecto del presupuesto general, con el acuerdo previo de las fuerzas políticas para disminuir la asignación presupuestaria del Órgano Judicial y reasignarlo a otras carteras de Estado.

Días después, el 6, López Suárez anunció la presentación de una primera parte del paquete de reformas fiscales, como resultado de las consultas realizadas durante las últimas semanas. El funcionario destacó el apoyo del sector financiero y de los empresarios: "muchas de las propuestas se mejoraron con las observaciones de los empresarios y ellos apoyan las medidas. Lo importante —dijo el ministro— es que todos están buscando que el país salga adelante". Las propuestas incluyen reformas a la Ley de Bancos y a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Sistema Financiero. "ANEP está consciente de que tendrá que hacer sacrificios y habrá costos", aseguró el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Federico Colorado, quien aseguró, no obstante, que parte del costo sería trasladado al consumidor final.

Mientras tanto, representantes del gobierno se reunían con delegados del Banco Mundial para exponerles su plan fiscal. Uno de esos delegados, Jane Armitage, entrevistada por un rotativo nacional, hizo algunos señalamientos: "El Salvador tiene tasas muy bajas, actualmente, comparado con los países amigos". La representante añadió que "el porcentaje de recaudo tributario es muy bajo en este país, alrededor del 12 por ciento del PIB, y debe alcanzar entre el 15 y el 20 por ciento", dijo. El día 18, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa comenzó el estudio del proyecto de reforma fiscal presentado por el Ejecutivo. Las fracciones de oposición manifestaron que deseaban que sus propuestas fueran incluidas en la iniciativa en cuestión, mientras se daba por descontado el apoyo de la fracción oficialista.

El día 21, siempre en materia económica, la presidenta del Banco Central de Reserva (BCR), Luz María de Portillo, dijo que la economía del

país crecería entre 1.8 y 2.3 por ciento en el 2004, comparado con el 1.8 por ciento de crecimiento registrado el año pasado. La funcionaria añadió que el incremento en los precios del petróleo incidirían en un aumento de la inflación, cuyo índice rondaría entre 3.5 y 4.5 por ciento, arriba de las proyecciones trazadas al inicio del año.

El 22, los diputados de la Asamblea Legislativa dieron por concluido el estudio de las reformas fiscales, en espera de su aprobación. Los cambios únicamente serían de redacción y no de contenido; por ello, el FMLN se manifestó a favor de incorporar las mociones de su partido, que buscaban cambios más allá de lo superficial. ARENA y PCN sí adelantaron sus votos para avalar la propuesta del Ejecutivo. En su edición del 24 de octubre, *La Prensa Gráfica* recoge algunas impresiones del gobierno en torno al proyecto de reforma fiscal presentado a la Asamblea y que se hallaba a punto de ser aprobado. La nota hace un repaso de las tensiones generadas entre el Ejecutivo y los empresarios, pero da cuenta de un acuerdo favorable entre ambos sectores. Saca expresa que su decisión política "es escoger una reforma que haga justicia y no golpee a la gente. Explicué a los empresarios que era el mejor camino —dijo el gobernante—, frente a otros proyectos", en clara alusión a la propuesta de reforma del FMLN, mucho más agresiva y radical. Un día después, ANEP y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) se pronunciaron en contra de algunos puntos específicos de la propuesta del Ejecutivo. En respuesta, Antonio Saca aseguró que su iniciativa esperaría lo necesario con tal de "escuchar a todos los sectores". Pero las objeciones empresariales no encontraron eco mientras la Asamblea Legislativa se hallaba en la recta final de la discusión.

El 27, los diputados de ARENA, PCN, CDU, PDC y un legislador del FMLN aprobaron el paquete de reformas tributarias y los cambios a la normativa penal para castigar a los evasores de impuestos. El FMLN se quejó porque no se incluyeron sus propuestas y denunció un acuerdo previo entre areneros y pecenistas. "Todo se dificulta porque el presidente Antonio Saca está creando una imagen de concertación, pero por debajo de la mesa está pactando otras cosas", se quejó el legislador efemelenista Humberto Centeno. Al día siguiente, los legisladores terminaron de aprobar las enmiendas a la Ley del IVA, Renta y Código Tributario para sellar, junto con una amnistía fiscal

de tres meses, el paquete de reforma tributaria presentada por el Ejecutivo. La fracción del FMLN, como enésimo signo de protesta, se ausentó de la ceremonia legislativa.

Por otro lado, en cuanto a la política doméstica, únicamente destacó el anuncio del FMLN de retirarse de la mesa de diálogo mientras su partido se encuentra en la recta final de los comicios internos. ARENA también ha tenido su proceso, aunque sin mayores traumatismos. Así, el día 11 de octubre, la cúpula efemelenista se retiró, hasta nuevo aviso según sus voceros, de la mesa de negociación que había convocado el Ejecutivo, ante la falta de resultados concretos. En respuesta, el presidente Saca dijo que mantendría las puertas abiertas para el FMLN. El mandatario dijo además que el partido de izquierda “demuestra que da la espalda a la concertación y el poco interés por contribuir a resolver los problemas”.

Al día siguiente no se hizo esperar la respuesta del FMLN. Ese instituto político desplegó un comunicado en el que fijó su posición en torno a su decisión: “el presidente Saca y su partido ARENA han continuado con la política del anterior presidente Flores Pérez: arreglos bajo la mesa con otras fuerzas políticas para conseguir los votos en la Asamblea Legislativa, e imponer sin dialogar ni concertar”, rezaba parte del comunicado girado en los principales medios escritos del país.

Los otros partidos políticos, salvo ARENA, no registraron mayor actividad. El evento de mayor trascendencia para el partido oficial fue la celebración de su convención ordinaria, realizada el día 24, en la cual el COENA, máximo organismo de dirección de ese partido, se comprometió a no designar los candidatos que se disputarán las elecciones primarias. El presidente de ese partido y presidente de la República, Antonio Saca, dijo que “la palabra imposición no cabe en ARENA” y que el objetivo del partido es recuperar la mayoría en la Asamblea Legislativa para que no “siga siendo un estorbo al trabajo del Ejecutivo”.

Como sea, el abandono de la mesa de diálogo por parte del FMLN ha sido la nota más relevante durante el mes de octubre, lo cual exige algunas líneas adicionales. Un análisis sobre las razones que explican la salida intempestiva del partido de izquierda de este esfuerzo, llamado “de concertación”, puede seguir diversos caminos, según los intereses y objetivos de los distintos analistas. Unos pueden

elegir reforzar el argumento del partido oficial según el cual “las actuaciones del FMLN responden a la dinámica misma del conflicto interno que actualmente vive ese partido [y] que con la decisión de abandonar la Mesa Permanente de Gobernabilidad [esa organización] da la espalda a las aspiraciones ciudadanas de que los políticos [pongan] el interés público por encima de intereses políticos electorales”. El editorial de *El Diario de Hoy* del 13 de octubre —de donde proviene la cita anterior— presenta una explicación que pretende ser más de fondo. Sostiene que “los comunistas nunca creyeron en la necesidad de diálogo” como mecanismo para solventar los problemas nacionales. “El desplante efemelenista —dice el editorial— no sólo violenta el espíritu de discusión constructiva que hay en las mesas, sino que quiere obligar a la adopción de una especie de gobierno sustituto del actual esquema. Pretende colocarse por encima y eventualmente anular al resto de fuerzas cívicas y productivas, para que las grandes decisiones del país se tomen en ‘petit comité’, el que estará siempre a merced de sus presiones y chantajes, e inclusive que le entren a tiros al país como en los ochenta”.

En la misma línea de la postura oficial, también se puede ser un poco más refinado, y pasar revista a los distintos argumentos de la propia izquierda para concluir, no se sabe ya si de manera ingenua o interesadamente, que si la razón estriba en la supuesta vinculación de ARENA con las agresiones a las alcaldías del FMLN se podría haber condicionado la permanencia del partido de izquierda en la mesa con el cese de las agresiones, en vez de anunciar su retirada. Por otro lado, si el motivo de la indignación de los dirigentes del FMLN se debe al uso propagandístico que el gobierno hace del tema de la concertación, se les sugiere que hablen con Saca porque, en su magnanimidad, no se molestará en modificar ni un tanto el contenido de sus mensajes para compartir con la izquierda las bondades de la concertación. Finalmente, si la inquietud reside en el hecho de los pocos avances que ha arrojado la mesa de diálogo, se pide paciencia a la izquierda, porque ese esfuerzo recién acaba de comenzar.

Lo que tienen en común los distintos argumentos en contra de la decisión del FMLN de abandonar la mesa de concertación es que parten de la buena fe del gobernante y, al mismo tiempo, manifiestan una voluntad por denigrar y “demonizar” a quienes no siguen el camino trazado por el oficia-

lismo. Este afán por defender las posturas gubernamentales o simplemente congraciarse con los argumentos que provienen del poder niega los hechos y mente descaradamente cuando trata de eximir de toda responsabilidad a la derecha. Es risible que se haya declarado que Saca estaría dispuesto a compartir los beneficios políticos de la concertación con la oposición cuando ha demostrado todo lo contrario en la práctica. Lo mismo puede decirse del argumento según el cual los efemelenistas quieren gobernar en pequeños comités que ellos puedan influenciar. La historia y realidad actual del país desmienten tales aseveraciones. Quienes tienen más influencia en la vida económica y política del país son un pequeño grupo de empresarios, a quienes Saca debe en gran medida su ascensión hasta la presidencia del país.

Una lectura política sensata de la decisión de los dirigentes de izquierda más bien tendría que preguntarse qué gana o pierde políticamente esa organización al abandonar la mesa de diálogo. Acerca de si la oferta de concertación de Saca entra en la línea de una visión renovada de la vida política, aún hay mucha tela que cortar. No es una casualidad que Saca haya desplegado sus aparatos informativos para seducir a los salvadoreños sobre la bondad de "su" concertación, llevándose todos los laureles sobre el tema.

Además, las lecturas que se han hecho de la oferta presidencial parecen olvidar que en política lo más importante no son las buenas intenciones, sino la fuerza real con que cuentan cada uno de los actores en la negociación. Saca no se ha presentado como el abanderado del diálogo porque es magnánimo —por lo menos hasta ahora no ha regalado cosa alguna a sus adversarios—. Lo hace porque se encuentra en una posición de debilidad en la Asamblea Legislativa. En su proyecto de hacerse con el control de ese órgano estatal en las próximas elecciones ha entendido que la carta del diálogo es el mejor ofrecimiento político de ese momento. Por eso se empecina tanto en vender la idea a los salvadoreños bajo la forma de propaganda interminable.

No cabe duda que la decisión del FMLN de retirarse de la mesa también es una decisión política que tiene sus riesgos y sus cálculos. El partido de izquierda tiene mucho que perder. Por un lado, no cuenta con la fuerza comunicativa de la que dispone el gobierno. Ni mucho menos cuenta con que los "analistas" reconocerán su buena fe en la

discusión política. En el tema del diálogo, hay una predisposición a condenar a los dirigentes de izquierda, quienes siempre son vistos con sospecha, debido precisamente a la presencia de sus dirigentes históricos en la vida política nacional. El riesgo principal que corre la estrategia de retirarse de la mesa es que deja la cancha libre a Saca y a sus analistas para que le digan a los salvadoreños, como de hecho lo han venido haciendo desde que ha salido a la luz pública la decisión efemelenista, que ese partido no está dispuesto a dejar de lado los intereses de sus dirigentes. Pero, también en el fondo, se podría decir que la presencia del FMLN en la mesa de diálogo tan sólo ha beneficiado al gobierno que sigue repitiendo a la sociedad que es el único responsable de la concertación. En ese sentido, lo más probable es que los dirigentes de izquierda hayan decidido abandonar la mesa porque, en el fondo, no ganaban mucho, desde un punto de vista político, sentándose en la misma mesa que Saca.

Una de las posibles razones que sustenta la decisión efemelenista —se ha dicho líneas arriba— es el ataque que sufrieran algunas de las sedes municipales que gobierna el partido de izquierda. Los embates se dieron durante la última semana de septiembre, pero a inicios de octubre todavía se vivía una tensa calma en las calles de Santa Tecla, por ejemplo, donde los daños materiales a las instalaciones de la municipalidad fueron cuantiosos. No hubo más ataques por parte de los comerciantes informales, pero las autoridades encontraron otro foco de tensión generado desde los sindicatos municipales, lo cual refuerza la hipótesis de que se orquestaba toda una campaña de desprestigio en contra de los gobiernos municipales efemelenistas. En ese marco, el día 4, agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron a 31 sindicalistas municipales de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), que habían dañado medio centenar de camiones recolectores de basura con el consecuente abandono de las actividades de recolección de unas 600 toneladas de desechos sólidos en la ciudad capital. Las acciones las habrían realizado en el marco de una jornada de protesta por el no reinstalo de 17 sindicalistas y otras demandas en contra de las autoridades municipales.

Los ataques de los comerciantes informales y el boicot de los sindicalistas mantuvieron en alerta continua a los alcaldes efemelenistas y sus concejos, pero, si se analiza con ojo crítico los sucesos

registrados, la alerta debería ser para toda la ciudadanía. El ordenamiento de los espacios públicos urbanos y el tratamiento eficiente de los desechos sólidos de los salvadoreños nuevamente han encontrado dos de sus peores enemigos: la politización y la incapacidad institucional. Ciudades limpias y ordenadas son indicadores inequívocos de la cultura y la convivencia de los habitantes de un país. En El Salvador, sobra decirlo, hay grandes déficit respecto de estos indicadores. En dicho atraso influyen, además de las carencias institucionales y las manipulaciones políticas, actitudes, comportamientos y normas cuyo cambio es indispensable para alcanzar los niveles de desarrollo que insistentemente prometen los sucesivos gobiernos.

Las reacciones de los políticos de derecha ante los ataques que hicieran los comerciantes informales en contra de los palacios municipales de Santa Tecla y Cojutepeque son muestra de la más burda politización. También lo ha sido la necia postura del COENA, incluyendo su presidente, de impedir que el alcalde arenero de San Martín deponga los desechos sólidos de su municipio en el relleno sanitario de Nejapa, liderado por alcaldes opositores, bajo el pretexto de que es ilegal. También tienen algo de manipulación política las protestas de los sindicalistas de las alcaldías. No obstante su importancia, el asunto no ha sido retomado con mayor interés por los medios de comunicación.

Otro asunto de interés nacional tuvo que ver, precisamente, con la agenda de las empresas de la comunicación, que en el mes de octubre tuvieron dos encuentros relevantes. El primero, durante la primera semana del mes, reunió en San Salvador a los representantes de la Asociación Interamericana de Radiodifusores (AIR), quienes discutieron sobre la situación de la libertad de expresión en el continente. A la inauguración del evento, presidida por el mandatario salvadoreño, asistieron unos 74 empresarios de la comunicación de Europa y América. En su mensaje de apertura, Antonio Saca afirmó que "aquí, como en otros países hermanos, hay conocidos enemigos de la libertad, hay sectores opuestos a la libertad de prensa y a la libertad de expresión". Luego, añadió que "todavía debemos proteger nuestro proceso democrático del acecho de aisladas tentaciones totalitarias", haciendo referencia a la izquierda política.

Semanas después, el día 24, desde Antigua Guatemala, el vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el salvadoreño

José Roberto Dutriz, puso como tema de discusión la libertad de los periodistas a reservarse las fuentes de información. Dutriz pidió en su informe sobre El Salvador que la SIP condenara públicamente a la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia por coacción en contra de los periodistas salvadoreños. No obstante, el representante del país ante ese organismo reconoció que desde el Ejecutivo se había dado una apertura significativa a los periodistas. El informe salvadoreño pidió que los periodistas fueran absueltos en caso de citatorios para declaraciones judiciales; al mismo tiempo, exigió que a los periodistas no se les exija que revelen sus fuentes. Un día después, el presidente Saca aseguró que giraría instrucciones para que se investiguen posibles casos de coacción legal a los periodistas, en atención a la denuncia incluida en el informe salvadoreño ante la SIP. Finalmente, como epílogo de ese asunto, el día 26, la SIP exhortó a la Asamblea Legislativa salvadoreña a reformar el Código Procesal Penal para que se incluya a los periodistas entre los profesionales con derecho a no declarar en citatorios judiciales. El gremio periodístico cerró filas para defender el derecho de guardarse sus fuentes.

Otros sucesos relevantes ocurridos en el exterior merecen ser recogidos en tanto que incidieron, directa o indirectamente, en el escenario político, y social salvadoreño durante el mes de octubre. El primero de ellos dice mucho de las altas aspiraciones del ex presidente Francisco Flores en contraste con su incidencia real en el debate internacional. El último día de septiembre, Flores lanzó sin pena ni gloria su fundación América Libre, con la presencia de pocas personalidades de las que habían sido invitadas. Ni siquiera llegó el actual mandatario de El Salvador al inicio de una cruzada que parece ser no más que un "hobby para ricos", según declarara el ex asesor del mismo Flores en materia de comunicaciones, Carlos Rosales, entrevistado por el periódico digital *El faro*.

Seguidamente, el día 4, el presidente costarricense, Abel Pacheco, pidió la renuncia a su antecesor en la presidencia de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, como secretario general de la OEA. El día 8, Rodríguez presentó su carta de renuncia ante el consejo de la OEA, movido por las acusaciones de corrupción que pesan en su contra. La ocasión se volvió propicia para las aspiraciones del ex presidente salvadoreño Francisco Flores, quien reveló su interés por ocupar el puesto que

dejara vacante el costarricense. El presidente Saca adelantó su apoyo a la moción de su antecesor: "Estoy dispuesto a apoyar un candidato único en Centroamérica y si ese candidato es el ex presidente Francisco Flores, lo vamos a apoyar", dijo entrevistado por periodistas.

En otro orden, el día 9 inicia en Washington la segunda convención de salvadoreños en el exterior, en el marco de la cual se discutieron temas relacionados con la política nacional y la economía. La globalización y los deberes y derechos políticos de la diáspora fueron los temas más discutidos. Un día después, el FMLN inicia el envío de cartas a diferentes embajadas acreditadas en el país para evitar el apoyo que llevara al ascenso de Flores a la secretaría general de la OEA. El 14, los presidentes centroamericanos se reunieron en San Salvador para definir una postura sobre el candidato de la región para la OEA. Los mandatarios pactaron que se propondría una única candidatura, además de buscar el apoyo de la comunidad de naciones del Caribe, CARICOM.

Ese mismo día, Antonio Saca declaró que no había noticias de que la República de China en Taiwan retiraría la ayuda oficial prestada a El Salvador, como sí lo había hecho con Nicaragua y estudiaba hacerlo con otras naciones centroamericanas que se habían visto involucradas en escándalos de corrupción. "No hemos recibido ninguna notificación. Taiwán es un país importante en la contribución con El Salvador y esperamos que esta no se interrumpa", dijo el mandatario salvadoreño abordado por periodistas. Al mismo tiempo, eran elegidas en la ciudad de Guatemala las autoridades que regirán el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) durante el próximo año. Resultó electo para la presidencia del foro el nicaraguense Fabio Gaeda, del oficialista Partido Liberal Constitucionalista (PLC). El Salvador contará con la vicepresidencia del arenero Rodrigo Samayoa y la secretaría del efemelenista Sigfrido Reyes.

Así las cosas, el mes de octubre cerró con la aprobación de la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo, el rompimiento del clima de negociación inaugurado por Saca y las intenciones de Flores por hacerse de la secretaría de la OEA. Sobre este último asunto hay mucha tela por cortar. Flores, en la recta final de su periodo presidencial, se empleó a fondo para convertir su sueño en realidad. Hizo alarde a más no poder de su "amistad" con el presidente estadounidense, George W.

Bush, se movió de un lado para otro fuera del país para buscar los apoyos necesarios, se valió del respaldo mediático, a nivel local, para promoverse como el candidato idóneo para ocupar el importante cargo... Pero, al final, su sueño se truncó, cuando el costarricense Miguel Angel Rodríguez fue electo Secretario General de la OEA. Ni el juego de imágenes ni el respaldo que, al menos de palabra, emanó de su amigo Bush le sirvieron a Flores en aquel momento para realizar una de sus aspiraciones existenciales más vitales: destacar como un líder regional de primer nivel.

Con todo, más allá de la ilusión de Flores y del interés que pueda tener el gobierno de Saca en promover su candidatura para la OEA, lo que debe ponderarse es la capacidad y los méritos de Flores para aspirar a ese importante cargo. Dicho sin mayores preámbulos, el ex presidente salvadoreño no tiene ni la capacidad ni los méritos para convertirse en Secretario General de la OEA. Para convenirse de ello, basta con dar una mirada rápida a algunas características, tanto de su personalidad política como de su ejercicio de gobierno.

Comenzando por esto último, hay que decir que, en conjunto, la administración de Flores fue una mala administración. No tuvo una visión de conjunto de los problemas cruciales de El Salvador —es decir, los problemas que atañen a la mayoría de salvadoreños—, gobernó con la vista puesta en lo que podía beneficiar a los grupos de poder económico —así como en lo que el gobierno de Bush podía esperar de su aliado incondicional—, excluyó a la oposición política de las principales decisiones gubernamentales y se rodeó de funcionarios sin ética, ambiciosos y sin el mínimo sentido de la responsabilidad social. La gran deuda de su gobierno —tal como se lo reprocharon los ex presidentes Cristiani y Calderón Sol— fue con las demandas y necesidades de la sociedad. Flores, pues, gobernó de espaldas a la gente, no se preocupó ni por la pobreza, la exclusión social y el abandono de miles de salvadoreños y salvadoreñas.

Este olvido de lo social se complementó con actitudes prepotentes y autoritarias tanto del mismo Flores como de algunos de sus colaboradores más cercanos. Hay quienes insisten en que la personalidad de Flores es proclive a la prepotencia y el autoritarismo. Es posible que ello sea cierto. Con todo, lo grave es que el ejercicio de gobierno de Flores se decantó en incontables oportunidades hacia la prepotencia y el autoritarismo, con lo cual

se socavaron, desde el gobierno, los cimientos de la débil democracia salvadoreña.

Por lo dicho, Flores no tiene ninguna credencial que lo respalde para aspirar a la secretaría general de la OEA. Fue un mal presidente de su país, mostró una sumisión bochornosa hacia el gobierno de Bush, tiene un indiscutible talante autoritario y lo que quiere no es servir a la democracia, sino satisfacer sus ambiciones personales de figurar como líder indiscutible a nivel continental. Si por aquello de los desatinos históricos resultara electo al cargo, ello supondría no sólo un desprestigio para la OEA —una mancha que la organización ya tuvo en el pasado—, sino un duro golpe a los afanes democratizadores que recorren el continente americano.

Por el momento, la discusión sobre las candidaturas está abierta. Líderes políticos más razonables —dentro y fuera del país— ya han planteado sus objeciones a la candidatura de Flores. En el gobierno salvadoreño, al parecer, todavía no se sopesan ni el bochorno que supone estar promoviendo a Flores ni el daño que se podría hacer al prestigio de la OEA si el ex presidente llegara a ocupar el cargo de Secretario General.

El presidente Saca y sus colaboradores deberían tener una postura clara y realista al respecto. Más aún, deberían ser conscientes de que la promoción del gobierno —o incluso la promoción del país— no está por encima del deterioro de instituciones tan importantes como la OEA. Lo que se tiene que hacer es promover la llegada al organismo americano de líderes políticos que, con independencia de su país de origen, tengan una trayectoria política irreprochable y un compromiso democrático probado. Definitivamente, Flores no cumple con ninguno de los dos requisitos: su trayectoria política no es irreprochable y su compromiso democrático es más que cuestionable.

Esto se sabe bien en el país y es bueno que se conozca en el exterior. La incompetencia, la prepotencia y el autoritarismo no deben ser premiados.

Una palabra más en torno a un evento que no podría pasar desapercibido: la conmemoración de los 25 años del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, último que conociera El Salvador. La virulencia con que aún hoy se analiza, desde algunos sectores, los sucesos de aquel día de octubre demuestra el rencor que guardan todavía los que fueron expropiados de sus tierras y otras propieda-

des. En este contexto nació ARENA y el difunto mayor Roberto D'Aubuisson se destacó entre los militares defensores del *statu quo*. Los sectores de derecha aprendieron la lección y terminaron por controlar la institución armada y poner de lado a los militares peligrosos, simpatizantes de las tesis izquierdistas. Un editorial de *El Diario de Hoy* hace memoria de los acontecimientos en estos términos: "recuérdese a este respecto que el régimen *de facto* estatizó el sistema financiero simultáneamente con el robo de las tierras. Y como con la reforma agraria, también la banca cayó rápidamente en bancarota pese a que era la más avanzada, ejecutivos de gran experiencia, administraciones eficaces, bien cimentadas infraestructuras, personal capacitado y la confianza y lealtad de sus clientelas. No cuesta adivinar el motivo de la estatización del sistema: instituciones solventes, progresistas, honestas y beneficiosas fueron tomadas porque, en las famosas palabras de Willy Sutton, un gángster de Chicago que también robaba bancos, es allí donde está el dinero".

Con esas palabras, si bien bastante alejadas de la realidad de las empresas descritas, cualquiera se hace una idea del grado de odio que el editorialista guarda a aquellos militares e intelectuales que tomaron parte o apoyaron el golpe. En el fondo, la derecha más conservadora no digiere el hecho de que aquel golpe de Estado respondió a una situación específica de la vida nacional y que tiene que analizarse más allá de las pasiones u odios particulares de los que fueron afectados. Así, no es del todo cierto que el país haya perdido veinticinco años de desarrollo o que los problemas económicos, sociales y políticos actuales tengan que ver directamente con las decisiones de la junta de gobierno de aquella época. Pero, en realidad, ¿cuáles eran los objetivos del golpe de Estado? Conviene llamar la atención sobre el hecho de que un sector progresista importante del país apoyó el golpe. Destacados intelectuales, conocidos por su apoyo a favor de un cambio en las estructuras políticas, sociales y económicas del país, aceptaron tomar parte, al lado de los militares, en la Junta de Gobierno. Y es que desde un principio, en la proclama de los militares se establece que "para obtener el logro de esas metas que con toda justicia demanda el pueblo salvadoreño, la Junta Revolucionaria de Gobierno integrará un gabinete formado por elementos honestos y capaces representativos de distintos sectores, quienes pondrán en juego todo su patriotismo en el desempeño de tan elevadas funciones".

El día siguiente de la insurrección militar, el analista más sagaz de la realidad política nacional de aquella época vislumbró que, no obstante la falta de tiempo para calibrar los hechos, el golpe en sí era prometedor. Ignacio Ellacuría dijo al respecto: "si se forma un gobierno revolucionario que haga justicia a las demandas y al sacrificio popular, que busque el respaldo de las fuerzas progresistas, que se mantenga abierto a la crítica, su paso por el poder puede ser trascendental no sólo por haber librado al país de una etapa de horror, sino por haber abierto un camino nuevo a través del cual el pueblo de El Salvador podrá forjar su destino".

En la medida en que se hiciera realidad la proclama de la Junta de gobierno, pensaba Ellacuría, "este 15 de octubre podrá constituir una fecha histórica en la lucha del pueblo salvadoreño para su reivindicación social. Puede constituir la fecha en que comienza la ruptura de las promesas derechistas del régimen anterior. Promesas incumplidas sobre la soberanía popular, el régimen democrático, los derechos humanos y la justicia social. La monotonía de estas promesas debe tocar a su fin en El Salvador. Las promesas deben ser transformadas en verdaderas y efectivas realidades. Hacia estas realizaciones se enfila la proclama de la Junta revolucionaria de gobierno encabezada por militares progresistas de El Salvador".

Una lectura de aquel pasado desde hoy demuestra que no se realizaron los sueños de Ellacuría —y de quienes junto con él peleaban por mejores condiciones para el país— respecto de las posibilidades de solucionar los problemas del país desde la primera Junta Revolucionaria de Gobierno. El enfrentamiento fratricida que los militares decían querer evitar se recrudeció y duró doce largos años. Además, hasta hoy no se han cumplido las promesas de justicia social de los salvadoreños.

Los acontecimientos del 15 de octubre culminaron con unas elecciones que, hoy se puede decir, significaron el inicio del proceso de normalización de la democracia representativa en el país.

Desde entonces, se reemplazan los gobernantes por procesos electorales. Pese a todas sus limitaciones, el proceso democrático sigue en marcha. Pero, ¿será la última vez que las fuerzas armadas intervengan en la vida política del país?

Hasta este momento, no ha surgido ningún acontecimiento especial que podría motivar a los militares a intervenir de manera directa en el proceso político. Los militares más conservadores y derechistas que recuperaron el control de la Fuerza Armada siguen marcando el ritmo de vida de la institución. Además, el desempeño electoral del partido de derecha, cuyos intereses son resguardados en última instancia por el estamento militar, ha sido exitoso en los últimos veinte años. Por todas estas razones, en el corto y mediano plazo, no se vislumbra otro golpe de Estado en el horizonte. Además, hoy por hoy, la coyuntura internacional es menos tolerante con ese tipo de aventuras políticas.

Pero, en el fondo, subsisten algunos elementos que puedan llevar a pensar que una crisis política sería no se puede descartar para un futuro no muy lejano. No sólo aún persisten graves violaciones a la justicia social y que la brecha de desigualdad se profundiza cada día más en el país; además, el sistema político aún no ha pasado por la experiencia de la alternancia. Esta posibilidad sigue siendo la peor pesadilla de la derecha y de los militares más duros. La falta de entendimiento entre la clase política en temas clave como el presupuesto general de la Nación, la reforma fiscal, la reforma electoral y otros asuntos son signo de que la democracia salvadoreña tiene mucho camino por recorrer. Mientras tanto, las campañas mal intencionadas y los tratos bajo la mesa seguirán siendo una herramienta alternativa al verdadero diálogo entre los diferentes sectores nacionales. Contrario a la expectativa favorable que despertó el gobierno de Saca, la coyuntura actual ha mostrado una vez más la dificultad de que dos proyectos políticos antagónicos —con su respectiva visión del mundo— se sienten a dialogar como caballeros.